

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN -

Medellín, catorce (14) de diciembre dos mil veintidós (2022)

Apelación auto
Exp.012-2021-00511

Vencido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, se resuelve el recurso de apelación interpuesto por HUMBERTO CARDONA ZAPATA por medio de su mandatario judicial, contra el auto que resolvió no librar mandamiento ejecutivo por concepto de intereses dentro del proceso ejecutivo a continuación del ordinario que adelantó en contra de PORVENIR S.A.

ANTECEDENTES:

El 30 de agosto de 2021, el juzgado de conocimiento que lo es el Doce Laboral del Circuito de Medellín, atendiendo la demanda ejecutiva presentada para obtener el cumplimiento de la sentencia que condenó al traslado de unos tiempos por medio del mecanismo de cálculo actuarial, así como al reconocimiento y pago de una pensión de vejez a cargo de BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, libró mandamiento de pago por la suma de \$45.891.358 por concepto de mesadas pensionales adeudadas de forma retroactiva entre el 01 de agosto de 2016 y el 30 de septiembre de 2020 a razón de 14 mesadas al año, además de la diferencia en la indexación por la suma de \$50.573.865 y negó la ejecución para lograr el

pago de intereses legales por ser pacífico en la jurisprudencia que los intereses que contempla el artículo 1617 del Código Civil son improcedentes por circunscribirse estrictamente a las obligaciones de contratos y actos jurídicos, además de no estar incluidos en la sentencia que se constituye como título ejecutivo.

El representante judicial del ejecutante se apartó de la decisión e interpuso recurso de reposición y en subsidio suyo el de apelación. El primero fue negado por encontrar ajustada la decisión a la realidad jurídica y procesal, y el segundo fue concedido, siendo esta la razón por la cual conoce esta Sala de Decisión Laboral.

El apelante busca la revocatoria parcial del auto que dio impulso a la ejecución, por considerar que si bien los guarismos del primer punto del mandamiento no son objeto de inconformidad, si lo es no acceder a perseguir el pago de los intereses moratorios que por naturaleza no buscan otra cosa que el restablecimiento a la pérdida del poder adquisitivo por no haberse realizado el pago de la prestación en manera oportuna, por lo que atendiendo a que para el momento de la sentencia se presumió que el obligado procedería con el cumplimiento de forma total sin que así haya ocurrido, considera que es natural que a partir del momento en que dejó de pagar el retroactivo se imponga este rubro por causar un empobrecimiento sin causa al beneficiario de la sentencia, a partir de lo que solicita la modificación de la providencia.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES:

Sea lo primero aclarar que la providencia cuestionada, es susceptible de la alzada conforme a lo previsto en el numeral 8° del artículo 65 del CPTSS,

según el cual, es apelable el auto que decida sobre el mandamiento de pago.

Pues bien, atendiendo los argumentos expuestos se tiene que los artículos 100 y 101 C. P. del T. y de la S. S., contemplan que es exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo que conste en un acto o documento proveniente del deudor o su causante, o que emane de decisión judicial o arbitral en firme.

Asimismo, el artículo 422 del Código General del Proceso permite demandar ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial.

Con base a lo anterior, y en virtud a que son las providencias emitidas en sede judicial las que sirven de base a la ejecución, es que procede el mandamiento ejecutivo solicitado, debiendo verificarse si a partir de su contenido es posible dar por sentado que los intereses moratorios tienen un respaldo que permita ser perseguida ejecutivamente o, si por el contrario, es acertada la decisión de la *a quo* que es atacada.

Pues bien, sobre los intereses legales atendiendo el fundamento normativo de lo pedido ha sido decantado y pacífico de tiempo atrás que en *“la legislación del trabajo ningún vacío presenta en cuanto a los intereses aplicables a deudas de carácter laboral, y, en esa medida, no hay lugar a la aplicación analógica de normas propias del Código Civil. De ahí, que una condena a intereses por la mora en el cubrimiento de créditos laborales, con fundamento en el artículo 1617 de dicho estatuto se exhibe equivocada, por cuanto se reitera, tal texto legal no es el llamado a gobernar el asunto”*. (Ver SL3449 de 2016 y STL13294 de 2018), argumentos que resultan

suficientes para excluirlos de cualquier obligación laboral ya sea dentro de los procesos declarativos o en los de ejecución.

Ya lo que tiene que ver con los intereses moratorios, cuya denominación exacta se utiliza, debe decirse que los aplicables en materia de seguridad social no son otros que los contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, los que no buscan la actualización monetaria de la condena por razones de la inflación, pues el propósito de ello está en cabeza de la indexación ordenada y debidamente librada, sino que es un mecanismo resarcitorio por la mora o tardanza en el pago de las prestaciones económicas del Sistema, misma que al no operar de manera automática, debe contar para efectos de la ejecución de una decisión declarativa donde se haya determinado su procedencia por el contexto de la situación analizada en el escenario judicial, encontrando que al respecto y de forma precisa el Tribunal Superior de Medellín dispuso su negativa (Pág. 33 Archivo 08), por lo que al no integrar la sentencia intereses de ninguna índole, mal pudiera advertirse, en tal sentido, que esté por tal concepto estructurado el título de recaudo ejecutivo, el que debe declarar manifiestamente el alcance de la obligación de la que se persigue su pago, por lo que atendiendo a que debe acudir a otros medios distintos de la mera observación para verificar su procedencia, no puede entenderse como un derecho declarado, cierto e indiscutible que pueda reclamarse por la vía ejecutiva, sino que se trata de un asunto que a juicio de esta dependencia debe desatarse en la vía ordinaria dispuesta para este tipo de conflictos por tratarse de un incumplimiento posterior a la providencia que los negó.

Es en ese orden de ideas lo definido por la Juez de Instancia se acompasa plenamente a las órdenes contentivas en el título ejecutivo presentado para obtener su satisfacción, por lo que al darse razón en cuanto se abstuvo de librar mandamiento de pago sobre intereses, se impone confirmar la providencia apelada.

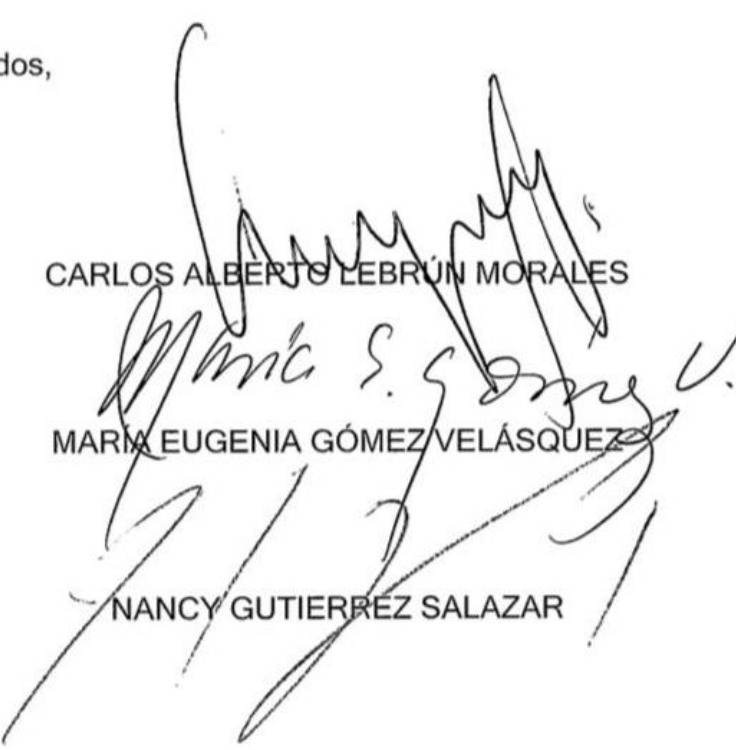
Sin costas en las instancias.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, **CONFIRMA** el auto apelado de fecha y procedencia conocidas.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS**.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Certifico: Que la sentencia anterior fue notificada por ESTADOS N° 226 fijados el 15 de diciembre de 2022 en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El Secretario.